

## **Resumen de “Breve historia contemporánea de la Argentina” (Romero)**

### **Capítulo 5 – “El empate, 1955-1966”**

Al día siguiente del golpe de Estado, Eduardo Lonardi se presenta como presidente provisional con la intención de restaurar prontamente el orden constitucional. Rodeado por grupos católicos y militares nacionalistas, proclamó que no había “vencedores ni vencidos” y procuró establecer acuerdos con los sindicalistas. En su opinión, el proyecto nacional y popular debía mantenerse, depurado de sus elementos indeseables.

Sin embargo, en el gobierno militar el poder era compartido con los grupos antiperonistas más tradicionales, respaldados por la Marina, cuyo vocero era el vicepresidente Isaac F. Rojas.

Esta última tendencia terminaría imponiéndose, llevando a Lonardi a la renuncia el 13 de noviembre. Éste sería reemplazado por el general Pedro Eugenio Aramburu, afín a los sectores liberales y antiperonistas.

Para 1955, el reordenamiento de la sociedad y la economía era estimulado por un mundo que, ya en plena Guerra Fría, planteaba desafíos novedosos. Las consignas de la autodenominada “Revolución Libertadora” en favor de la democracia coincidían con las tendencias políticas de Occidente, donde la democracia liberal dividía las aguas con el Este totalitario.

El despliegue del Estado benefactor fue acompañado por una integración y liberalización de las relaciones económicas en el mundo capitalista.

En 1947, los acuerdos monetarios de Bretton Woods establecieron el patrón dólar y los capitales volvieron a fluir libremente por el mundo.

Desde el Fondo Monetario Internacional (FMI) se proponía a los países latinoamericanos una receta “monetarista”, consistente en la estabilización de la moneda abandonando la emisión fiscal, dejando de subvencionar a los sectores “artificiales” y estimulando las actividades de exportación tradicionales.

Por su parte, desde la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) se proponía una receta “estructuralista”, que sostenía que los países “desarrollados” podían ayudar a los “subdesarrollados” a eliminar los factores de atraso mediante inversiones en sectores clave.

Para adaptarse a este mundo no bastaba con restaurar el orden constitucional y acabar con los vestigios del régimen peronista; era necesario modernizar la economía. Esto, desde la perspectiva de los economistas, implicaba modificar el estatus logrado por los

trabajadores durante el peronismo. Este era un gran obstáculo, ya que se trataba de una clase obrera madura.

En este período, entre las fuerzas sociales embarcadas en la transformación, que no habían terminado de definir sus objetivos y sus alianzas, y las antiguas, que conservaban una importante capacidad de resistencia, se produjo una situación de “empate”, prolongada hasta 1966.

Aramburu, que encabezó el gobierno provisional hasta 1958, asumió la decisión de desmontar el aparato peronista: el Partido Peronista fue disuelto y se intervinieron la CGT y los sindicatos, puestos a cargo de oficiales de las Fuerzas Armadas. Una gran cantidad de dirigentes políticos y sindicales fueron detenidos y proscriptos políticamente. La administración pública y las universidades fueron depuradas de peronistas y se controlaron férreamente los medios de comunicación; se prohibió cualquier propaganda favorable al peronismo, así como la mera mención del nombre “Perón”. En 1956, se derogaría por decreto la Constitución de 1949.

Si bien esta política fue masivamente respaldada por la Marina, suscitó divergencias al interior del Ejército. Tal es así que el 9 de junio de 1956 se produjo un levantamiento militar encabezado por el general Juan José Valle. Este intento fue reprimido, culminando con el fusilamiento de muchos civiles así como de los principales jefes militares.

Desde entonces, las depuraciones de oficiales fueron frecuentes y poco a poco el grupo más decididamente antiperonista fue ganando el control del Ejército.

En cuanto a la política económica, Raúl Prebisch –mentor de la CEPAL- elaboró un plan que combinaba algunos principios de la nueva doctrina con un programa más ortodoxo de estabilización y liberalización.

Los instrumentos que el Estado tenía para intervenir (IAPI, manejo de los depósitos bancarios, etc.) fueron desmontados. Se devaluó el peso y el sector agrario recibió un importante estímulo, con lo que se confiaba equilibrar las cuentas externas. Se aprobó el ingreso del país al FMI y al Banco Mundial. No hubo una legislación clara sobre el capital extranjero.

En cuanto a la política social, se combinó eficiencia y represión con lo que patrones y gerentes empezaron a recuperar autoridad en las plantas. Las convenciones colectivas fueron suspendidas y los salarios cayeron fuertemente en 1957.

En esos momentos, fueron numerosas las huelgas (en especial en 1956) y fue frecuente el sabotaje o el terrorismo.

Al calor de esta resistencia al régimen dictatorial, surgieron nuevos dirigentes sindicales mucho más templados para el combate. El gobierno “libertador” hizo lo posible para desplazarlos, pero fracasó y debió resignarse a tolerarlos y a que ganaran las elecciones en los sindicatos que se normalizaban. En septiembre de 1957 se reunió el Congreso Normalizador de la CGT y los peronistas, nucleados en las 62 Organizaciones, accedieron a su control.

Proscrito el peronismo, estas organizaciones sindicales asumieron la representación gremial y, al mismo tiempo, política; siendo desde entonces la “columna vertebral” del movimiento.

Desde su exilio, Perón conservaba todo su poder simbólico y se dedicaba a reunir a todos cuantos aceptaran invocar su nombre para organizar la resistencia a la dictadura. Para el gobierno y las fuerzas políticas que lo apoyaban, el “pacto de proscripción” planteaba un problema respecto a qué hacer con el peronismo.

Esto ocasionaba distintos posicionamientos: desde la derecha, se trató de dar un acercamiento con los sectores nacionalistas del peronismo; desde la izquierda, algunos dejaban el bando antiperonista para tratar de conducir al movimiento obrero (esto generaría incluso una división en el Partido Socialista).

De a poco la figura de Arturo Frondizi se perfilaba como una alternativa atractiva para quienes tenían perspectivas de izquierda o del nacionalismo popular.

Su ascenso en la UCR provocó una ruptura en 1956: por un lado, la UCR del pueblo encabezada por Ricardo Balbín (que se identificaba con el gobierno “libertador”), y, por otro, la UCR Intransigente, encabezada por Frondizi, quien proclamaba el levantamiento de las proscripciones y el mantenimiento del régimen legal del sindicalismo.

En 1957, acosado por dificultades económicas y una creciente oposición sindical y política, el gobierno provisional empezó a organizar su retiro y a cumplir con el compromiso de restablecer la democracia. Se convocó a una Convención Constituyente (para legalizar la derogación de la Constitución de 1949 y actualizar el texto de 1853), que resultó un fracaso ya que Perón ordenó votar en blanco, siendo esta porción de los votos la más amplia.

Para las elecciones de 1958, Frondizi negoció con Perón el apoyo electoral, a cambio del futuro levantamiento de las proscripciones. De este modo, Frondizi se impone en las elecciones presidenciales realizadas el 23 de febrero de 1958.

Frondizi presidió el gobierno entre mayo de 1958 y marzo de 1962. En su nuevo programa de gobierno (que resultaba decepcionante para sus seguidores de izquierda), aspiraba a renovar los acuerdos- de origen peronista- entre los empresarios y los trabajadores, convocando a estos a abandonar la actitud hostil y a compartir los beneficios de un desarrollo económico impulsado por el capital extranjero. El discurso de Frondizi esbozaba un país en crecimiento y sin conflictos, otorgando concesiones, por ejemplo, a la Iglesia en el campo de la enseñanza y a los militares, en reiteradas ocasiones.

El estilo del presidente consistía en la negociación táctica con las grandes corporaciones, y en consecuencia una escasa valoración de la escena política y de la discusión programática, si bien de antemano los partidos políticos rechazaban cualquier propuesta de un gobierno cuya victoria consideraban ilegítima.

El nuevo gobierno tenía amplia mayoría en el Congreso y controlaba la totalidad de las gobernaciones, no obstante lo cual su poder era muy precario. Los votos eran prestados, y la ruptura con Perón era una posibilidad muy real. Por su parte, las Fuerzas Armadas desconfiaban de quien había llegado al poder ganando con los votos peronistas y de quien

había roto el compromiso de la proscripción. Los partidos políticos, debido a su oposición automática, no llegaban a conformar una red de seguridad para las instituciones.

Por ello Frondizi se vio obligado a actuar rápido: Un aumento de salarios del 60 %, una amnistía y el levantamiento de las proscripciones (que, con todo, no incluían ni a Perón ni al Partido Peronista), así como la sanción de la nueva ley de asociaciones profesionales, casi igual a la de 1945, fueron parte de la deuda con el peronismo.

Frondizi asumió personalmente la negociación con compañías petroleras extranjeras respecto a la exploración y puesta en explotación de las reservas, y al mismo tiempo autorizó el funcionamiento de universidades no estatales (lo que generó un debate entre los partidarios de la enseñanza “laica” y los de la “libre”, en su mayoría católicos).

Respecto a su política económica, lo más importante fueron las leyes de radicación de capitales extranjeros y de promoción industrial, sancionadas antes de que terminara 1958.

Por ellas se aseguraba a los inversores extranjeros libertad para remitir ganancias y para repatriar el capital. Se establecía un régimen especial a las inversiones en sectores juzgados clave para la nueva etapa de desarrollo: la siderurgia, la petroquímica, celulosa, automotriz, energía, y naturalmente petróleo.

Habría trato preferencial en materia de derechos aduaneros, créditos, impuestos, suministro de energía y compras del Estado, así como en la protección arancelaria del mercado local, todo ello manejado con un alto grado de discrecionalidad.

Como resultado, las inversiones extranjeras crecieron exponencialmente en el plazo de dos años, la producción de acero y automotores creció de modo espectacular, y casi se llegó al autoabastecimiento de petróleo.

La fuerte expansión culminó en una crisis económica caracterizada por un desequilibrio en la balanza de pagos y una fuerte inflación, en 1958.

En Diciembre de ese año se pidió ayuda al FMI y se lanzó un Plan de Estabilización, cuya receta recesiva se profundizó cuando se designó ministro de economía a Álvaro Alsogaray, vocero de las corrientes liberales. Este aplicó un programa de devaluación, congelamiento de salarios y supresión de controles y regulaciones estatales. De aquí resultó una fuerte pérdida en los ingresos de los trabajadores y una desocupación generalizada.

Los efectos de esta política económica, contradictoria con la desarrollista inicial, y la dureza con que el gobierno reprimió las protestas, a partir de la huelga del frigorífico Lisandro de la Torre en enero de 1959, pusieron a los sindicatos en pie de guerra. Las huelgas se intensificaron y recrudeció el sabotaje. El gobierno respondió interviniendo los sindicatos y empleando al Ejército para reprimir, según lo establecía el plan Conintes (Conmoción Interna del Estado), al tiempo que los empresarios despedían a los cuadros más combativos de cada planta.

Por este tiempo en los sindicatos se fue consolidando un nuevo tipo de dirección, menos comprometida en la lucha cotidiana y más preocupada en controlar las complejas estructurales sindicales, que utilizaba la corrupción o el matonismo para acallar disidencias.

La cabeza de esta nueva burocracia sindical fue Augusto Vandor, jefe de la UOM, quien se

caracterizaba por administrar la desmovilización, anunciando paros duros de palabra pero poco combativos, y por negociar de manera permanente con todos los sectores de poder. Los militares, por su parte, fueron un factor de hostigamiento constante para con el gobierno de Frondizi; si la Marina fue siempre contraria a la política presidencial, en el Ejército Frondizi intentó alentar una corriente que lo apoyara, sin mucho éxito. Frondizi soportó 32 “planteos” militares, que exigían un cambio en su política o tenían que ver exclusivamente con la institución militar, cediendo a todos y a cada uno. Este hostigamiento se acentuó en junio de 1959 cuando llegó a la Comandancia en Jefe del Ejército Toranzo Montero, quien ejerció una férrea tutela sobre el presidente. La crispación en las Fuerzas Armadas aumentó con la Revolución Cubana de 1959. Identificaron el comunismo con los peronistas, los estudiantes universitarios, así como el grupo que orientaba Rogelio Frigerio –hombre clave en el gobierno de Frondizi-. En este marco, distintas acciones de Frondizi encendieron las alarmas en el Ejército: el acuerdo con el sospechoso presidente brasileño Janio Quadros en 1961, su entrevista con Ernesto Guevara y la abstención argentina en la Conferencia de Cancilleres de Punta del Este, que expulsó a Cuba del sistema interamericano. La presión militar fue tan grande que, meses después, el gobierno se vio obligado a romper relaciones con Cuba.

Para las elecciones de gobernadores de 1962, el gobierno de Frondizi asumió el riesgo de enfrentar al peronismo en elecciones abiertas, para lo cual determinó adoptar una política social más flexible (para ello despidió en 1961 a Alsogaray y a Toranzo Montero). Los dirigentes sindicalistas dominaron el aparato electoral y pusieron a sus hombres en la cabeza de las listas del peronismo. Los candidatos peronistas ganaron ampliamente en las principales provincias, entre ellas Buenos Aires. Inmediatamente Frondizi intervino esas mismas provincias, cambió todo su gabinete y encargó a Aramburu una mediación con los partidos políticos, que se negaron a respaldarlo. Frente a la negativa de la oposición política, los militares obligaron a Frondizi a renunciar el 28 de marzo de 1962. Lo sucedería el presidente del Senado, José María Guido.

Los militares le impusieron a Guido un gabinete definitivamente antiperonista. En un fugaz ministerio de quince días, Federico Pinedo dispuso una espectacular devaluación que favoreció particularmente al sector agropecuario. Fue reemplazado por Álvaro Alsogaray, quien repitió su estrategia estabilizadora, que golpeó fuertemente al sector industrial local.

Mientras los grupos de oficiales antiperonistas más duros controlaban el gobierno, una posición alternativa empezaba a dibujarse en el Ejército, que se oponía a una participación tan directa en la conducción política y que consideraba que la identificación entre peronismo y comunismo era simplista.

En el mes de septiembre de 1962, las dos facciones (azules, los legalistas, y colorados, los más antiperonistas) sacaron las tropas a la calle y amagaron combatir. La contienda militar

fue ganada por los azules, que manifestaron su respeto por la legalidad, la institucionalidad y la búsqueda de una salida democrática (postura que daban a conocer mediante la revista *Primera Plana*).

El triunfo azul llevó al Comando en Jefe al general Juan Carlos Onganía y al gobierno a quienes trataban de articular un frente político que de alguna manera integrara al peronismo.

Sin embargo, las condiciones para la formación de un frente no estaban dadas y los partidos políticos en general renegaban de esa opción.

También se oponía la Marina, que el 2 de abril de 1963 realizó su propia sublevación. Hubo bombardeos y varios cuarteles destruidos; la Marina fue derrotada, pero su impugnación tuvo éxito. Luego del combate, el comunicado de los azules retomaba las posturas antiperonistas y se declaraba en favor de la proscripción.

Por su parte, la burocracia sindical peronista negoció ingresar al frente democrático –a pesar del propio Perón-. En 1963 lograron la normalización de la CGT.

Las negociaciones respecto al frente fracasaron cuando Perón proclama la candidatura de Vicente Solano Lima; ello generó el alejamiento del frondicismo y de distintos grupos políticos. Esa candidatura fue vetada por el gobierno, apelando a la ley de proscripción del peronismo.

En las elecciones de 1963 triunfó la fórmula de la UCR del Pueblo, a cuya cabeza estaba Arturo Illia, mientras el peronismo había llamado a votar en blanco.

Illia ganó las elecciones con una magra parte de los sufragios, y si bien tenía la mayoría en el Senado, sólo controlaba algo más de la mitad de las gobernaciones y no tenía mayoría en Diputados.

Su presidencia se definió por el respeto de las normas, la decisión de no abusar de los poderes presidenciales y la voluntad de no exacerbar los conflictos y buscar que estos decantaran naturalmente. En esto último se centraron las críticas, que lo tacharon de irrealista e ineficiente.

Su política económica fue llevada adelante por un grupo de técnicos con fuerte influencia de la CEPAL. Tenía como base el énfasis en el mercado interno, políticas de distribución, protección del capital nacional, en conjunción con un Estado muy activo en el control y en la planificación económica. El gobierno se benefició además de la coyuntura favorable que siguió a la crisis de 1962-1963, la recuperación industrial y dos años de buenas exportaciones. Los ingresos de los trabajadores se elevaron y el Congreso votó una ley de salario mínimo. El gobierno controló los precios y avanzó con decisión en áreas conflictivas, como la comercialización de medicamentos. Frente al capital extranjero, procuró reducir la discrecionalidad de las medidas de promoción; en este sentido, anuló y renegó los contratos petroleros hechos por Frondizi.

Su política económica tuvo una fuerte resistencia entre los actores empresariales, que se preocupaban por la pasividad del gobierno frente a los avances sindicales. El gobierno trató de controlar a los dirigentes sindicales aplicando la ley de asociaciones profesionales, lo cual fue respondido con un Plan de Lucha que consistió en la ocupación de 11 mil

fábricas en el plazo de 2 meses.

El vandomismo aprovechaba su dominio de los sindicatos y de las organizaciones políticas peronistas para practicar su arte de la negociación. En 1964, alentados por un eventual levantamiento de la proscripción, los sindicatos organizaron una reorganización del Partido Justicialista, lo que los fue llevando a un enfrentamiento creciente con Perón, amenazando su liderazgo. A fines de 1964, la dirigencia sindical organizó el "Operativo Retorno" para la vuelta de Perón al país. Éste tomó un avión, pero antes de poder llegar al país fue detenido en Brasil y expulsado nuevamente hacia España.

En marzo de 1965, se realizaron elecciones de renovación parlamentaria. El gobierno proscribió al Partido Justicialista pero autorizó a los peronistas a presentarse bajo rótulos menos conflictivos, como la Unión Popular (partido neoperonista controlado por el vandomismo). El peronismo sacó una buena porción de los votos, pudiendo constituir un fuerte grupo parlamentario.

En 1967 se realizarían elecciones de gobernadores; si Vandom imponía sus candidatos en las principales provincias, habría logrado institucionalizar al peronismo sin Perón y armar una poderosa fuerza disidente.

En 1965, Perón había enviado al país a su esposa María Estela, conocida como Isabel, como su representante personal. Isabel reunió a todos los grupos sindicales adversos a Vandom y motorizó una división en las 62 Organizaciones. Sin embargo, fracasó en su intento de ganar la conducción sindical.

Con todo, en las elecciones de gobernador llevadas a cabo en Mendoza a principios de 1966, Isabel apoyó una candidatura peronista alternativa a la de Vandom y la superó ampliamente en votos. De modo que a mediados de 1966 la competencia entre Perón y Vandom estaba empatada: aquél se imponía en lo electoral y éste en lo sindical.

---

El programa de modernización que en 1958 impulsó Frondizi tenía como ejes la promoción planificada por el Estado y una renovación técnica y científica. En esta línea surgieron el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), se creó el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), el Consejo Nacional de Inversiones (CFI) y en 1963 el Consejo Nacional de Desarrollo (Conade).

Aún así, el principal pilar de este desarrollo debían ser los capitales extranjeros. Estos se instalaron por la vía de la compra o la asociación con empresas nacionales existentes o simplemente por la concesión de patentes o marcas. Su influencia se notó en la transformación de los servicios o las formas de comercialización (por ejemplo, supermercados).

Las nuevas ramas de la industria (petróleo, acero, celulosa, petroquímica, automotores) crecieron aceleradamente, en tanto que las que habían liderado el crecimiento en la etapa anterior (textil, calzado, electrodomésticos), se estancaron o retrocedieron.

Se creó así una brecha entre un sector moderno y eficiente de la economía, en progresiva expansión y otro tradicional, que se estancaba. Esta brecha tenía que ver con la presencia de empresas extranjeras o su asociación con ellas, de modo que para muchos empresarios locales la experiencia fue fuertemente negativa. Esto repercutió asimismo en los trabajadores: el empleo industrial tendió a estancarse y se deterioraron los ingresos de los asalariados. La participación relativa de capital y trabajo en el PBI varió sensiblemente: la porción de los asalariados cayó del 49 % en 1954 al 40 % en 1962.

El horizonte de las empresas extranjeras radicadas en el país siguió siendo el mercado interno y no resultó necesario alcanzar una eficiencia que les permitiera competir en el mercado exterior. Atraídos por regímenes de promoción, pugnaron por sostener las situaciones de privilegio a lo largo del tiempo.

Pese a que los gobiernos habían desarrollado una serie de mecanismos de planificación, sus políticas no tuvieron en cuenta cuestiones clave como cuándo dejar de promover, para estimular la competitividad o bien compatibilizar las necesidades fiscales con la promoción.

En los diez años que siguieron al peronismo, la economía se transformó sustancialmente y creció, si bien menos de lo esperado.

En el sector industrial, se dio un promedio entre el crecimiento de los sectores medios y la retracción de los tradicionales.

El sector agrícola creció debido a incentivos cambiarios ocasionales o las mejoras tecnológicas impulsadas por el INTA, alcanzando la producción niveles similares a los de 1940.

Las crisis económicas estallaron con regularidad cada tres años (1952, 1956, 1959, 1962, 1966) y fueron seguidas por políticas de “estabilización”.

La expansión del sector industrial, comercial y de servicios dependía de las divisas con que pagar los insumos necesarios para mantenerlo en movimiento. Éstas eran provistas por un sector agropecuario con escasas posibilidades de expandirse y que era habitualmente usado para solventar el sector interno. Todo crecimiento de éste significaba un aumento de las importaciones y concluía en un déficit en la balanza de pagos. Los planes de estabilización (promulgados desde el FMI) consistían en una fuerte devaluación y luego en políticas recesivas – suspensión de créditos, paralización de obras públicas- que reducían el empleo industrial y los salarios, y con ellos las importaciones, hasta lograr el equilibrio fiscal.

Cada ciclo de avance, detención y nuevo avance debe pensarse en el contexto de una puja por el ingreso de los distintos sectores, que a su vez se inscribe en una puja política más general, de modo que al empate político le corresponde un empate económico.

Con las crisis y la devaluación se dio en principio una traslación de ingresos del sector urbano al rural, pero también de los trabajadores a los empresarios. Paralelamente esta traslación se daba a su vez desde empresas chicas a empresas grandes, por lo que la concentración de la propiedad avanzó a saltos.

---

En cuanto a la sociedad, continuó el proceso de migración interna del campo a la ciudad, cambio el desplazamiento no tanto ahora desde la zona pampeana, sino desde el nordeste y el noroeste del país; también comenzó la migración desde los países limítrofes.

El empleo industrial se estancó, siendo ocupado su lugar por la construcción (obras públicas), que junto al pequeño comercio y algunos servicios absorbieron a los migrantes internos y a los contingentes de bolivianos, paraguayos o chilenos.

A partir de este fenómeno fueron apareciendo cinturones de “villas miseria” alrededor de las grandes ciudades.

El número de asalariados industriales en general se mantuvo estable, si bien fueron víctima de las políticas sociales regresivas de estos períodos. Con todo, los sindicatos organizaron una eficaz resistencia, lo suficiente como para mantener la homogeneidad de la clase obrera, sindicalizada y peronista.

Al mismo tiempo, nuevos contingentes se sumaron a la clase media, creciendo grandemente el número de asalariados de clase media.

En cuanto a la educación, consolidada ya la primaria, se prolongó la expansión de la enseñanza media y luego la universitaria.

Respecto a las clases altas, se fueron diversificando y nutriéndose de nuevos empresarios, militares y hasta algún gremialista exitoso.

Asimismo, se dieron importantes cambios en las formas de vida: apareció la píldora anticonceptiva y una actitud más flexible sobre las conductas sexuales y las relaciones familiares; el voseo empezó a imponerse en el trato cotidiano y la conversación se nutrió de temas tomados de la sociología y el psicoanálisis. Se fue dando una expansión y homogeneización del consumo: producción en masa, propaganda y *marketing*; se esparcieron nuevos centros comerciales y el *jean* se convirtió en prensa universal.

---

En el ámbito de la cultura, los intelectuales antiperonistas pasaron a regir las instituciones oficiales y el campo de la cultura todo. Las vanguardias artísticas se concentraron en el Instituto Di Tella.

El principal foco de la renovación cultural estuvo en la universidad. El nuevo rector de la Universidad de Buenos Aires -designado en 1955-, José Luis Romero lideró un proceso de “desperonización” de la universidad, en pos de modernizar sus actividades.

Se consideró en general que la ciencia debía convertirse en la palanca fundamental de la economía, lo que generó un debate entre el “cientificismo” y el “anticientificismo”, que consideraba que la ciencia debía regirse con perspectiva al desarrollo nacional.

Las facultades se nutrieron de laboratorios y científicos con dedicación exclusiva, y los egresados marcharon masivamente a completar su formación en el exterior.

En las ciencias sociales la modernización se asoció con dos nuevas carreras: psicología y sociología, en donde descolló la nueva escuela fundada por Gino Germani.

Las relaciones de la universidad con los distintos gobiernos fue, en general, conflictiva.

Más aún cuando el presidente Frondizi decidió autorizar las universidades privadas en igualdad de condiciones con las del Estado. Ello generó el debate en 1958 entre los partidarios de la enseñanza “libre” (católicos) y la “laica” (liberales y progresistas). La universidad se fue constituyendo en una “isla democrática” en un país que lo era cada vez menos, de modo que la defensa misma de la “isla” contribuyó a consolidar las solidaridades internas.

---

Para 1966, nadie tenía mucha fe en la democracia y menos aún en una democracia ficticia y de escasa legitimidad (Illia ganó aproximadamente con el 20 % por ciento de los votos). Si las izquierdas creían que se trataba de un opio burgués, el frondicismo prefería apostar a la eficiencia tecnocrática, mientras que los radicales del Pueblo no vacilaban en preferir un golpe de Estado antes que un gobierno que abriera el juego al peronismo.

Éste fluctuaba en la apuesta a las elecciones o la negociación directa con los factores de poder. La derecha, por su parte, no lograba organizar un partido atractivo para las elecciones.

Los sectores concentrados de la economía, en los que el capital extranjero tenía un peso decisivo, se movían con comodidad en la escena corporativa negociando con los factores de poder reales (los sindicalistas, las Fuerzas Armadas, y en menor medida, la Iglesia). Los sindicalistas habían probado sin suerte la vía electoral, donde Perón los había derrotado. De a poco, empezaron a escucharse voces para romper este empate.

El catolicismo veía preocupada el cuestionamiento de los valores esenciales –la familia, la tradición, la propiedad- y condenaba en su totalidad al mundo moderno y a la democracia liberal.

Los militares, alarmados por la Revolución Cubana y en el marco de la “Doctrina de seguridad nacional” impulsada por los Estados Unidos, estaban cada vez más consustanciados con su papel tutelar del Estado y defensor de los valores occidentales y cristianos.

El gobierno de Illia fue tildado de “ineficiente” por una campaña propagandística en su contra que clamaba por la eficiencia, el orden y la modernización, y, en última instancia, un “cambio de estructuras”, al mismo tiempo que exaltaba la figura de Onganía.

De este modo, el 28 de junio de 1966 los comandantes en jefe depusieron a Illia y entregaron la presidencia al general Onganía. Con la caída de la democracia limitada terminó el empate, las opciones se definieron y los conflictos de la sociedad, hasta entonces disimulados, pudieron desplegarse plenamente.